BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 663

12 de mayo de 2015

Pág. 337

Respuesta:

Partiendo del estado de desarrollo en el que se encuentra el acuerdo marco de colaboración suscrito por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, se informa que, una vez concluido el trámite de audiencia conforme a lo establecido en el artículo 24.1.C de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado el pasado 26 de marzo de 2015 ratificó el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

En el momento en el que se da respuesta a esta pregunta, el Proyecto de Real Decreto está pendiente de dictamen por parte del Consejo de Estado.

Por su parte, el Real Decreto que regulará la articulación, la equivalencia y la cohesión en materia de las categorías profesionales de enfermero de cuidados generales y de enfermero especialista en el SNS ya ha sido remitido al Consejo de Estado para que emita el informe preceptivo.

La promoción del empleo enfermero, así como la política de recursos humanos del SNS serán objeto de debate en la Conferencia sobre Enfermería, que se celebrará próximamente.

En lo que respecta al registro de profesionales sanitarios, cabe señalar que se están tramitando las órdenes necesarias para el correcto desarrollo del Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Además de estas órdenes, y tal y como establece el artículo 5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, debe ser el Consejo Interterritorial el que determine los principios generales y criterios con los que fijar la norma reguladora de estos registros para el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 5.1 de la citada Ley.

En materia de especialidades de enfermería, se informa que el Real Decreto de Diplomas de Acreditación y de Acreditación Avanzada está en tramitación y será remitido próximamente al Consejo de Estado.

En materia de bioseguridad, se está trabajando en la elaboración de una guía de bioseguridad y en próximas fechas se concluirá su implementación:

— La actividad se está abordando en el marco de la salud laboral junto con las Comunidades Autónomas.

— Los destinatarios de la guía son todos los profesionales sanitarios, si bien los profesionales más afectados por este tipo de accidente son los enfermeros y los auxiliares de enfermería.

— La guía está en la primera fase de borrador y debe ser objeto de consulta a las diferentes profesiones y asociaciones en materia de Salud Laboral y de Trabajo.

Finalmente, y tal y como se informó en el mencionado Consejo Interterritorial del pasado 26 de marzo, ya se ha iniciado la tramitación del Proyecto de Real Decreto de Unidades de Gestión Clínica, con el que se pretende situar al paciente como eje fundamental del sistema sanitario y aumentar la implicación del profesional en una gestión por procesos y con mayor autonomía.

Madrid, 6 de abril de 2015.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/068535

(184) Pregunta escrita Congreso

Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).

Respuesta:

En relación con la información solicitada, se indica que, de acuerdo con el artículo 149.1.30.^a de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y establece mandatos a los poderes públicos para garantizar ese derecho. Como consecuencia de ello, y también según las previsiones de la propia Carta Magna, a lo largo de los años transcurridos desde la

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie D Núm. 663

12 de mayo de 2015

Pág. 338

promulgación de la misma se ha ido completando el desarrollo del Estado de las Autonomías mediante la transferencia de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas que lo conforman.

Las funciones y servicios en materia de enseñanza no universitaria fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón por Real Decreto 1982/1998, de 18 septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza no universitaria.

La financiación de la enseñanza no universitaria en dicha Comunidad Autónoma y su reparto a nivel provincial es el que establece el Gobierno aragonés, a partir de las partidas presupuestarias recibidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

En cualquier caso, el gasto público por alumno en centros públicos en España está por encima de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): en 2011, las Administraciones Públicas en España dedicaron unos 9.300 dólares estadounidenses por alumno en centros públicos, cifra por encima de la media de la OCDE (9.000 dólares estadounidenses): en educación infantil fue de unos 7.000 dólares estadounidenses (la media de OCDE fue de 6.500), y unos 9.300 dólares estadounidenses por alumno de Educación Primaria, Secundaria y Post-Secundaria no Terciaria en centros públicos (la media OCDE fue de 8.800 dólares), según el estudio Panorama de la Educación 2014 de la OCDE.

En el ámbito universitario, los capítulos en materia de becas de los Presupuestos Generales del Estado, no sólo no se han reducido sino que se han incrementado así como el importe ejecutado, que creció en el último ejercicio presupuestario.

Por otra parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ha llevado a cabo reformas en las Administraciones Públicas que han reducido los costes de funcionamiento gracias a la racionalización y centralización de la contratación administrativa.

En este sentido, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha puesto en marcha la fusión entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), lo que supone una reducción de costes, en la medida en que las dos entidades comparten medios y servicios comunes.

Por lo que se refiere al pago de pensiones contributivas en la provincia de Zaragoza durante los ejercicios 2012 y 2013, el importe total de las obligaciones reconocidas ascendió a 2.512.480.536,31 euros y 2.630.749.025,77 euros, respectivamente.

Conforme a lo estipulado en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social se incrementaron en 2013 un uno por ciento, tomando como referencia la cuantía legalmente establecida a 31 de diciembre de 2012.

No obstante, se incrementaron un uno por ciento adicional al previsto en los citados Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, todas aquellas pensiones que no superaban los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo anual. Estas pensiones, por tanto, se incrementaron en el dos por ciento.

En consecuencia, del análisis de la información relativa a obligaciones contraídas por la Seguridad Social en Zaragoza para pensiones contributivas, se observa que entre los ejercicios señalados no se ha producido una disminución del gasto en pensiones, sino un incremento del 4,71 por ciento.

En lo referente a la materia de dependencia, la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ha supuesto la creación de un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía, que viene a consolidar el estado de bienestar. Para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, la Ley atribuye a las administraciones públicas implicadas —Comunidades Autónomas y direcciones territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) de Ceuta y de Melilla— una serie de funciones y responsabilidades específicas, respetando el reparto de competencias en vigor que asigna a las citadas administraciones competentes el desarrollo y la gestión de los servicios sociales en el ámbito de su territorio.